

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN
DEMANDADOS	COLPENSIONES - AFP PORVENIR S.A.
RADICADO	05001-31-05-004-2017-00822-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora

ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN en contra de **COLPENSIONES** y de la **AFP PORVENIR S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 022**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas judiciales de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 13 de noviembre de 2019 y conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la actora, quien nació el 3 de diciembre de 1963, se vinculó al régimen de prima media con prestación definida a través del entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde el 1º de julio de 1985, pasando posteriormente, partir de marzo de 2004 a PORVENIR S.A., en el marco del traslado de régimen pensional, donde permanece actualmente.

Se duele, que el asesor de PORVENIR S.A., no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la suficiente ilustración necesaria; y que, al contrario, le ocultaron información relevante, por lo que su decisión de afiliarse al RAIS se encuentra viciada de ineficacia.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PORVENIR S.A., y que en consecuencia, se declare que la actora ha

permanecido sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, y que se ordene a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES todos los aportes realizados por la asegurada y, a esta última recibir todos esos valores y activar su afiliación al régimen que administra, como si nunca hubiese dejado de pertenecer al mismo, y condenar a las demandadas al pago de las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales (folios 60 y ss. del expediente).

COLPENSIONES describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 60 y siguientes del expediente. A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; indicó que no le constan los hechos de la demanda, salvo el agotamiento de la reclamación administrativa, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ACEPTAR LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PENSIONAL DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, AUSENCIA DE CAUSA PARA PEDIR, PRESCRIPCIÓN y COMPENSACIÓN”*.

PORVENIR S.A., por su parte, allegó contestación a la demanda, visible a folios 84 y siguientes del expediente.

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; negó los hechos de la demanda, aceptando el traslado al RAIS y la reclamación de retorno a prima media, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“PRESCRIPCIÓN, FALTA DE CAUSA PARA PEDIR E INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, y ENRIQUECIMIENTO SIN CASA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 13 de noviembre de 2019, el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación, al advertir que PORVENIR S.A. no cumplió con su carga probatoria de acreditar haber brindado asesoría suficiente a la demandante, por lo que le impuso a dicha entidad, la obligación de trasladar a Colpensiones, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, todas las sumas que recibió con ocasión del traslado de la demandante, tales como cotizaciones, eventuales bonos, rendimientos, gastos o comisiones de administración, pago de seguro y reaseguro y pagos al fondo de garantía de pensión mínima. A su vez, le impuso a Colpensiones la obligación de recibir las mencionadas sumas y, activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, y condenó en costas procesales a PORVENIR S.A. en favor de la demandante, exonerando de las mismas a COLPENSIONES.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los apoderados judiciales de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES.

La apelación de PORVENIR S.A. versó sobre su inconformismo con todo el sentido de la decisión, y subsidiariamente en contra de la orden de devoluciones dada en la providencia.

Lo primero lo sustentó afirmando que en el presente caso no se presentó falta de información ni ineficacia, en tanto PORVENIR S.A. actuó conforme a los datos económicos que se conocían para el momento del traslado, y que no se podía haber brindado información distinta a la suministrada, en tanto no era posible conocer ni presumir cuales iban a ser los salarios futuros de la demandante en lo sucesivo.

Agregó que no puede predicarse la existencia de un vicio en el consentimiento, ya que la afiliación se realizó de manera voluntaria y la

asegurada adelantó actos a través de los cuales ratificó su interés de pertenecer al RAIS.

Indicó que la demandante no demostró ningún interés por su situación pensional y solo con el transcurso del tiempo procedió a adelantar esta acción, sabiendo que fue negligente cuando tuvo la oportunidad de haber obtenido la suficiente información.

Su disenso con la orden de traslado de las cuotas de administración, los descuentos por garantía de la pensión mínima y las primas previsionales, lo sustentó solicitando la revocatoria de la misma, argumentando que, si se ordena la devolución de estos conceptos como resultado de la ineficacia del acto de traslado se estaría generando un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, ya que fue PORVENIR S.A. quien administró estos recursos generando rendimientos en favor de la demandante, se trata de descuentos con sustento legal que no se hicieron por capricho de la entidad, existen en ambos regímenes, se ejecutaron debidamente en su momento, no debe existir restituciones mutuas sobre los mismos al tenor de lo dispuesto por el artículo 1746 del CC al no haber existido desmedro del bien administrado, y eventualmente, si bien no existe la prescripción de la ineficacia, si se configuraría la misma respecto a la devolución de los mencionados rubros.

La apelación de COLPENSIONES se dirigió a refutar la declaratoria de ineficacia insistiendo en que la demandante realizó actos jurídicos posteriores a la suscripción del formulario de afiliación, como la firma del bono pensional y la realización de aportes voluntarios, que a su juicio ratifican su interés de pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad.

Citó jurisprudencia del órgano de cierre, en el sentido de que existen otros elementos, adicionales al formulario de afiliación, a través de los cuales se puede advertir la voluntad del interés de permanecer en el régimen, concluyendo que en el presente caso debe revocarse la declaratoria de ineficacia, al existir correspondencia entre voluntad y acción que ratifica el interés de la demandante de pertenecer al RAIS.

Alegatos de Conclusión:

En la debida oportunidad procesal, el Dr. Alejandro Miguel Castellanos López, con TP. Nro. 115.849 del CSJ, como apoderado judicial sustituto de PORVENIR S.A. presentó alegaciones. Esta sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente en la calidad anotada para que lleve la representación judicial de dicha entidad.

A través de dichos alegatos solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia expresando que en el presente caso no se probó por la demandante ningún vicio en el consentimiento; a su juicio no se configura el supuesto normativo generador de la ineficacia (artículo 271 Ley 100 de 1993); se dio cabal cumplimiento a las obligaciones de información radicadas en cabeza de la administradora; se trató de un acto jurídico celebrado conforme a los requisitos necesarios de existencia y validez, y; la orden de restituciones mutuas dada en la sentencia no consulta las normas legales sobre la materia.

La apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. EDUILCE CORREA ARGUELLES, portadora de la T.P. 235.514 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución allegado al plenario, solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado, pues en su sentir, en el sub lite se presenta una imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador de conformidad con el artículo 2 de la ley 797 de 2003, donde se estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Señala que la ineficacia invocada recae sobre un presunto error, que en el caso en concreto no se encuentra válidamente acreditado, ni con el soporte probatorio documental ni con el interrogatorio practicado a la demandante, por lo que la ineficacia de traslado invocada carece de viabilidad, la mera afirmación de la parte actora de lo que aconteció hace varios años al momento de su traslado al Régimen de ahorro individual no puede ser tomado como cierto absolutamente ya que como se dijo,

De forma subsidiaria, y solo de confirmarse lo de la ineficacia del traslado, solicita se confirme la sentencia en cuanto a que se ordene a la AFP codemandada PORVENIR S.A. retornar y devolver a COLPENSIONES, todos los componentes de la cuenta de ahorro individual que recibió con ocasión a la afiliación de la señora ERLI MARGARITA MARIN ARANGURE, tales como: cotizaciones, aportes y rendimientos financieros causados, en el retorno se deben incluir la cuotas, gastos o pago de administración, pagos de seguros y reaseguros y pagos destinados al fondo de pago de pensión de garantía mínima, debidamente indexados.

Y finalmente el apoderado judicial de la demandante, pretende se confirma la sentencia de primer grado, precisando para ello que, no existen en el expediente pruebas documentales o de otra índole que demuestren que la Administradora PORVENIR S.A. le brindó a la señora ERLI MARGARITA MARÍN ARANGUREN una asesoría integral, veraz, oportuna y completa, en donde se le haya indicado las respectivas ventajas y desventajas de permanecer en el Régimen de Prima Media, o las desventajas y riesgos inherentes al traslado de régimen pensional efectuado el día 20 de febrero de 2004. Tampoco existe prueba alguna que demuestre que la Administradora le haya entregado un Plan de Pensiones o el Reglamento de la Administradora, como lo exigía el artículo 15 del Decreto 656 de 1994. La Administradora nunca efectuó un cálculo, cuadro o proyección comparativa mediante la cual pudiera explicar la forma de pensionarse en uno u otro régimen pensional, o los requisitos y las variables usadas para liquidar su pensión. No le informó sobre el derecho de retracto. Tampoco se probó en ningún modo que se le haya informado que tenía una prohibición legal para regresar al Régimen de Prima Media faltándole 10 años para cumplir la edad pensional.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por las apoderadas judiciales de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del RPM al RAIS que realizó la demandante a través de PORVENIR S.A., alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado que en tal virtud se efectúe, teniendo movilidad entre del régimen de prima media con prestación definida, al de ahorro individual con solidaridad, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de dicho cambio.

Más que simplemente tratarse del paso de un régimen de reparto que constituye un fondo público común, a un régimen fundamentado en el ahorro del propio asegurado, el fondo privado que recibe a la persona trasladada, a través del agente adscrito a la administradora, debe garantizar al interesado una completa ilustración de las ventajas y desventajas que le representa en su caso concreto ese cambio. Y no se trata de una simple información o encuesta

que se limite a indagar por los datos generales del afiliado, sino que debe corresponder a un examen real y profundo sobre todo su contexto laboral, familiar, económico e incluso social, de cara a la decisión que más convenga frente a los dos regímenes pensionales, en el marco del derecho a su libre elección.

De no realizarse esa antesala de asesoría, se afecta la eficacia y validez del acto de traslado, el cual será ineficaz, entendiéndose que el traslado nunca existió. Ello por cuanto, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a subrayar, que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y luego de haber empezado a desarrollar una línea jurisprudencial desde el año 2008 (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008), que fue decantando su posición a través del desarrollo de instituciones como *“el buen consejo”*, *“la inversión de la carga de la prueba”*, además de avanzar en la consolidación del concepto propio de la seguridad social, al pasar de entender que, más que tratarse de una simple nulidad, lo que se presentaba con la ausencia de información, era la Ineficacia, como sanción propia del acto jurídico en estos temas (Sentencias SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL

17.595 del 18 de octubre de 2017), concluyó en una pacificada jurisprudencia (**sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**), que en la actualidad continúa manteniendo su mismo sentido (Sentencia SL 3199 de 2020 entre otras).

Esta línea jurisprudencial, parte de destacar, que el deber de información es ineludible; que existe y se hace exigible, desde la propia creación de los regímenes pensionales que introdujo la Ley 100 de 1993, sin importar que, si bien se han promulgado normas más recientes en las que se ha desarrollado el tema (numeral 1º del Artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el Artículo 23 Ley 795 de 2003; Artículo 9 de la Ley 1328 de 2009 y Decreto 2555 de 2010), se trata de una obligación que deriva de la propia Ley 100 de 1993, que promulgó la existencia de los dos regímenes pensionales, y el derecho a la libre elección.

También ha quedado claro, que a nivel procesal, el tema se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es preciso, asimismo, tener en cuenta, que para la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 24 y siguientes del expediente, se advierte que la señora ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN, se vinculó al régimen de prima media con prestación definida a través del entonces Instituto de los Seguros Sociales, desde el 1º de julio de 1985, pasando posteriormente, partir de marzo de 2004 a PORVENIR S.A., en el marco del traslado de régimen pensional, donde permanece actualmente.

Revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que PORVENIR S.A. no alcanzó a probar haber brindado asesoría con suficiencia a la demandante, en su proceso de traslado.

No puede pasarse por alto, que por el simple hecho que la actora haya suscrito un formulario de afiliación, ello equivalga a una completa asesoría conforme a las particularidades de su caso.

Para la época del traslado de la demandante (año 2004), tal y como se refirió en precedencia, es indudable que eran exigibles estas obligaciones de asesoría, evidenciándose que la línea jurisprudencial en que se apoyó el A quo, y que esta Sala comparte, resultan completamente aplicables, siendo preciso concluir que el acto de traslado del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual, a través de PORVENIR SA, fue ineficaz, y no produjo los efectos jurídicos pertinentes.

Se trata de la configuración de una sanción de pleno derecho (ineficacia), que se atribuye a la falta de cumplimiento de las obligaciones profesionales de la administradora del régimen privado, al no haber suministrado la información y asesoría pertinentes, en la oportunidad procedente, y no en otra posterior.

Los argumentos presentados en sus recursos de apelación por las apoderadas judiciales de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES, respectivamente tendientes a enarbolar que el fondo privado se encontraba en imposibilidad de conocer las fluctuaciones económicas que experimentaría el salario de la asegurada después de haber suscrito el traslado, o que la actora habría realizado actuaciones con posterioridad a la firma del formulario que denotarían su interés de pertenecer al régimen de ahorro individual con solidaridad, no resultan de recibo, en tanto, es claro conforme a la línea jurisprudencial pacífica del órgano de cierre, que las obligaciones de asesoría, información y buen consejo se deben valorar en términos de oportunidad, esto es, si resultaron ser suministradas en el momento determinante previo al traslado para que la decisión se hubiere tomado lo suficientemente informada y con el conocimiento de todas las implicaciones que se pudieren generar, y, en segundo lugar, es preciso destacar que la incertidumbre sobre el valor de los ingresos de los asegurados no puede ser un tema del cual dependa el mayor o menor grado de acompañamiento que se dé a este, ya que ese es simplemente uno de los aspectos a considerar, siendo preciso hacer una valoración integral

de todo su contexto familiar, profesional, laboral y productivo para brindarle una asesoría completa, que fue lo que no ocurrió en el presente caso.

A partir de las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia **será CONFIRMADA**, entendiéndose para todos los efectos legales, que la señora ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN, siempre ha pertenecido como afiliada a Colpensiones, sin solución de continuidad.

Ahora, en virtud del grado jurisdiccional de Consulta, pero a su vez resolviéndolo como punto de apelación formulado por PORVENIR S.A., en lo relativo a las cuotas de administración y las primas previsionales, se hace menester revisar, en general, la orden de devoluciones dada al fondo privado codemandado en la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que se trata de un tema que involucra el futuro financiamiento de la pensión por parte de COLPENSIONES.

El juez de primera instancia ordenó a PORVENIR S.A., trasladar a Colpensiones, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, los aportes realizados con sus respectivos rendimientos, incluyendo las cotizaciones, las sumas adicionales de la aseguradora descontadas, los gastos de administración y los porcentajes descontados por garantía de la pensión mínima.

Dicha orden resulta consecuente con el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, entre otras, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, decantó que, *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.-

En consecuencia, al ser evidente que el efecto de la ineficacia hace que las cosas retornen al estado en que se encontraban antes del traslado, y que estos descuentos se realizaron en ejecución de un contrato que no surtió

efectos ni nació a la vida jurídica, esta sala **CONFIRMARÁ** el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, sin acoger las argumentaciones de la apoderada judicial de PORVENIR S.A., cuando aspira a que se revoque la orden de trasladar los rendimientos, o cuando sugiere que el recibo de las cuotas de administración y cuotas previsionales por parte de Colpensiones constituiría un enriquecimiento sin causa, ya que es preciso destacar que, no puede el fondo sacar provecho de su propia omisión en suministrar la asesoría, y, de otro lado, los descuentos por administración y primas previsionales tienen sustento legal, correspondiendo a Colpensiones percibir la cotización integral de la asegurada sin aplicación de dichos descuentos, ya que es la entidad que deberá responder por la afiliación permanente de la asegurada al régimen de prima media, sin solución de continuidad.

Es intrascendente que la gestión administrativa del fondo haya resultado provechosa para la actora y que por esa razón perciba los rendimientos. Ello no derruye la ineficacia, ni sufre ninguna alteración, ya que, esas sumas ingresaron al patrimonio de la actora, y no fue ella quien dio lugar a la ineficacia del acto.

Costas procesales en segunda instancia.

Teniendo en cuenta que PORVENIR S.A. y COLPENSIONES fueron vencidas en el recurso de alzada, deberán pagar costas procesales de segunda instancia a la señora ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN. Agencias en derecho: 1 SMLMV para 2021 a cargo de cada una de dichas entidades.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia, que se conoce en apelación y consulta, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a **PORVENIR S.A.** y a **COLPENSIONES** a pagar costas procesales de segunda instancia a la señora **ERLY MARGARITA MARÍN ARANGUREN**, en la suma de 1 SMLMV para 2021 a cargo de cada una de dichas entidades, conforme a lo expuesto.

TERCERO: SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **071** del **28 de abril de 2021**.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>